



Declaración Pública

Los intentos del Gobierno por blanquear su política ambiental

Santiago, 12 de agosto de 2004

En estos días una misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE realiza en Chile una Evaluación del desempeño ambiental, en el marco de la solicitud de nuestro país para ser admitido como miembro pleno del selecto grupo de economías pujantes. El Gobierno del Presidente Ricardo Lagos busca obtener un certificado de buena conducta ambiental e incorporarse así a las ligas mayores de los países desarrollados como una forma de mostrar un nuevo triunfo internacional.

Dentro del trabajo desarrollado, la misión de expertos contempló un encuentro con ONGs ambientalistas para recoger su opinión respecto de la participación ciudadana en la gestión y fiscalización ambiental y a la sustentabilidad del modelo económico chileno. Para esto la CONAMA, convocó a un selecto grupo de instituciones, pese a manejar un listado con más de 600 organizaciones ciudadanas en el país. El criterio de selección es una incógnita y el procedimiento estuvo marcado por la falta total de transparencia. Es factible pensar entonces que se trató de engañar al equipo de expertos internacionales mostrándoles solo a un reducido grupo de ambientalistas.

En los últimos cuatro años ha prevalecido una sistemática práctica de subordinar la política ambiental del Gobierno a la estrategia de integración comercial internacional. A ello se suma una planificada acción gubernamental de cooptación y dispersión de las organizaciones ciudadanas preocupadas por defender el medioambiente. El documento elaborado por el Gobierno de auto evaluación ambiental es en extremo complaciente, llegando a falsear la realidad de los hechos y de la política ambiental oficial como lo han denunciado algunas ONGs ambientalistas, en especial lo relativo a los impactos socio-ambientales.

De los tres pilares en que se sustentaba el programa de Gobierno del Presidente Lagos, esto es crecimiento económico, protección ambiental y equidad social, solo se le ha dado énfasis al primero. Los costos del crecimiento deben ser soportados por los sectores más vulnerables del país acentuándose la inequidad e injusticia ambiental. Son los pueblos originarios, las comunidades pesqueras y agrícolas, los pobladores de la periferia de los grandes centros urbanos los que a diario deben convivir con la contaminación y degradación ecológica del crecimiento económico sin disfrutar del respectivo chorreo. Sin embargo, estos importantes sectores, que constituyen la gran mayoría de la sociedad civil organizada en el país no fue invitado a exponer su visión y evaluación del desempeño ambiental en Chile.

Es nuestro deber denunciar públicamente este intento de blanqueo de la política neoliberal plenamente asumida por la administración Lagos, lo que ha derivado en un grave incumplimiento de su propio programa de Gobierno. La manera en que la CONAMA pretendió utilizar a las organizaciones de la sociedad civil para, en definitiva, “vender” una “falsa” imagen de país, es inaceptable. Afortunadamente, un gran número de las ONGs ambientalistas mantienen su independencia del Estado rechazando los somníferos suministrados durante años por la CONAMA y exigiendo cambios de fondo en esta materia.